

Hidrocarburos y Nacionalización

La crisis ha llegado, y otra vez, Bolivia se encuentra desprevenida. Como la peor de las consecuencias, está la tragedia humana; miles de trabajadores mineros ya han quedado sin trabajo y los que aún mantienen su empleo, se ven obligados a aceptar condiciones laborales ilegales e inhumanas por no perderlo.

Otra vez la crisis nos sorprende con nuestra economía atada a la producción de materias primas, principalmente hidrocarburos y minerales, y esto, en su estadio más primitivo, es decir, la simple extracción de materias primas y su exportación en bruto. Esto significa que no contamos ni siquiera con las posibilidades técnicas e institucionales que nos permitan diferenciar los diversos elementos que se hallan presentes en nuestras exportaciones, por ejemplo, el titanio de aquello que se ha declarado solamente como plomo, o los numerosos elementos que salen del país incluidos en el gas húmedo. Por ello no podemos ni siquiera conocer el justo precio de las materias primas que estamos exportando.

Los hidrocarburos han constituido hasta ahora el pilar de la economía del Estado y, la nacionalización ha sido la política bajo la cual se ha conducido este sector. Pero el curso de los hechos durante los últimos años nos lleva a plantearnos una serie de preguntas sobre el rumbo real de la nacionalización.

Los que más nos preocupan son fundamentalmente hechos de dos tipos: por una parte, aquellos que demuestran que las transnacionales petroleras firmantes de los 44 contratos petroleros, mantienen una política cuya finalidad es generar malestar para desestabilizar políticamente al país y socavar la nacionalización. Por otra parte están los hechos que indican que, el gobierno aun mantiene las esperanzas de que las transnacionales se conviertan en socios del pueblo boliviano.

Las intenciones de las transnacionales son evidentes, por una parte, del repetido desabastecimiento del mercado interno de carburantes que ha tenido lugar los últimos 3 años y por otra parte, de la falta de inversión en cualquier otra actividad que no sea solamente la extracción de hidrocarburos con fines de exportación. Pero esto se debe no sólo a una finalidad política sino también, y esto es lo más importante a largo plazo, a que el interés económico de las transnacionales es diferente a los que implica la nacionalización, y a los intereses del pueblo boliviano.

Las transnacionales se caracterizan por su desprecio por el mercado interno y la supeditación de este a las exportaciones. Una consecuencia lamentable derivada de estos intereses, es que, bajo las condiciones actuales, cuando Bolivia negocia el precio del gas con Brasil y la Argentina, en realidad está negociando el precio al cual las transnacionales presentes en el país, se venderán el gas boliviano a sí mismas, es decir a sus sucursales en aquellos países.

Es muy preocupante, la orientación que actualmente se ha dado al desarrollo del sector nacionalizado, por una parte, con la creación de sociedades anónimas subsidiarias de YPFB regidas más por el derecho privado que por el público, y por otra, apoyándose en el asesoramiento de aquellas instituciones que justamente fueron las que privatizaron el sector, es decir, el Banco Mundial y el BID, y junto a estas, en países que comparten la orientación neoliberal de aquellas. La situación es tal que hace temer que se haya llegado a un punto que está más cerca de una nueva privatización que del fortalecimiento de la nacionalización.

En el campo de la minería, el breve auge que experimentamos desde el año 2005 ha terminado y la crisis nos encuentra sin una política nacional minera. Numerosas empresas cooperativas y privadas pequeñas se han visto obligadas a cerrar, pero al mismo tiempo, ocurre algo paradójico que expresa muy bien la situación de dependencia del país respecto a las transnacionales de materias primas. Esto es que el volumen de las exportaciones no ha disminuido, incluso se ha incrementado; y se debe a que la gran minería aumentó su producción para mantener sus ganancias, pero esto, a costa de vaciar más rápidamente los yacimientos bolivianos, justamente como hicieron los varones del estaño durante la Segunda Guerra mundial.

Frente a esta situación, un análisis de los beneficios que recibe el país por la actividad minera privada, no deja lugar a otra conclusión que la siguiente: no existe un justificativo económico para que la explotación de los recursos del subsuelo continúe en manos de las transnacionales ■

Los hidrocarburos han constituido hasta ahora el pilar de la economía del Estado y, la nacionalización ha sido la política bajo la cual se ha conducido este sector. Pero el curso de los hechos durante los últimos años nos lleva a plantearnos una serie de preguntas sobre el rumbo real de la nacionalización.